

# TOLERANCIA Y NEGOCIACION

**P**UEDE decirse del texto conjunto de los partidos democráticos del país, en su reunión del día 27, que no ofrece nada nuevo con respecto a sus declaraciones anteriores. Es un elogio. No hay ni un paso atrás en sus peticiones, que son sencillas y claras, ni tampoco hay un paso demasiado audaz en el camino de lo imposible o de la ruptura. Esta treintena larga de organizaciones que van des una moderación derechista a una izquierda acentuada pide algo que, como ha quedado dicho en otras ocasiones en estas mismas páginas, debía ser reivindicación misma del Gobierno, y debía estar en sus propios programas. A veces lo está en sus declaraciones, pero luego no se traduce a sus comportamientos. Lo que piden los partidos demócratas españoles es que antes del referéndum y antes de las elecciones generales queden reconocidos todos los partidos políticos, sin esa ambigua y oportunista separación entre "legales", "legalizables" y "no legalizables" que han hecho oficialmente miembros del Gobierno: en una democracia, todos los partidos son legales en principio, y sólo los Tribunales de Justicia pueden suspenderlos o disolverlos cuando haya cometido algún delito. Reconocimiento, protección y garantía de las libertades políticas y sindicales, neutralidad de la Administración pública (visible en una disolución urgente del aparato del Movimiento), amnistía política verdadera, igualdad de todos en los medios de comunicación de masas propiedad del Estado, negociación de las normas de procedimiento en referéndum y elecciones, aplicación de los procesos electorales a todos los países y regiones de España... Nada de esto es un maximalismo. Se trata de una oposición modesta y escasamente ambiciosa en estos momentos. Se estaba esperando que la oposición lanzase ya su campaña de "abstención activa" que han propugnado algunos de sus miembros —especialmente el PSOE y el PCE— contra la que el Gobierno se había curado ya en salud: hubiera sido una ruptura definitiva. En cambio, se ha previsto una comisión negociadora. Una negociación "pública y colectiva", se dice, entre el Gobierno y la oposición de-

mocrática, sobre los siete puntos básicos de la democracia predemocrática; lo cual indica que incluso esta postura modesta es negociable. Hubiera sido deseable que esta comisión negociadora se hubiera puesto ya en pie, en lugar de esperar a una nueva reunión, la del miércoles 1 de diciembre, a catorce días de distancia del referéndum. El tiempo apremia. Pero sin duda no es fácil discernir quiénes pueden negociar con el Gobierno, y también parece que se desea, antes —quizá a través de una entrevista que el señor Ruiz-Giménez habrá tenido ya, cuando estas líneas se publiquen, con el presidente del Gobierno, señor Suárez— tener alguna respuesta en el sentido de que el Gobierno desea efectivamente abrir esta negociación. Un punto difícil ha de ser el de la presencia del partido comunista en la comisión negociadora.

**S**IN ser maximalistas, siendo como queda visibles moderados los puntos de la declaración, y puramente lógicos, no parece, sin embargo, que vayan a tener buena acogida por parte del Gobierno. Ni la disolución del aparato del Movimiento, ni la entrega de espacios en la televisión y la radio a los diferentes partidos, ni las nuevas leyes que serían necesarias para la legalización de todos los partidos, para las garantías de libertades políticas y sindicales, parecen estar

en sus manos ni en su voluntad. Ya lo habría hecho si fuese así. La voluntad del Gobierno parece muy claramente expresada, por todo lo que ha hecho hasta ahora; preparar unas Cortes que sin llamarse así serían constitucionales, por la vía de este referéndum como paso previo y por las elecciones generales subsiguientes, cuyo composición sería de una mayoría de la derecha continuista suficiente como para evitar cualquier ruptura demasiado estrepitosa de los círculos actuales de poder. El Gobierno no ha aflojado ni uno sólo de los resortes que tiene en sus manos, heredados del régimen anterior, para llevar a cabo sus planes. Ni los de la propaganda masiva ni los de la represión activa. Tiene sus medidas y no se sale de ellas. Está actuando con verdadera inteligencia —para sus propósitos— y con oportunidad. Desde su toma de posesión se apoderó de la iniciativa política y no la ha soltado más. Su intención de franquearse la confianza del exterior la está consiguiendo a nivel de Gobiernos, y en el país ha sabido crear una imagen de enemigo de los "ultras" —a la que han colaborado y colaboran activamente estos últimos, sobre todo en el mantenimiento de posturas de violencia y amenaza— y hasta del Gobierno anterior, que si un momento pudo aparecer como liberador y democratizante a algunos imaginativos o conformistas, resulta ahora, visto con la perspectiva del pasado y a través de la actitud de alguno de sus miembros, un Gobierno retrógrado y absolutamente continuista.

**E**L Gobierno puede tener ahora la seguridad de que ganará el referéndum, en el sentido de que las posiciones de "abstención activa" van a ser menores de lo que se esperaba por parte de la oposición y, de los votos emitidos, la abundancia del "Sí" va a ser considerable. No podrá creer, si es tan inteligente como aceptamos, que el resultado de este referéndum representa una verdadera respuesta de la opinión pública, porque no ha intentado realmente dejar en absoluta libertad de criterio a esa opinión, porque está forzando el voto y porque sus aparatos de presión están fun-







cionando al máximo. Pero no parece que sea esa su preocupación fundamental. Parece más bien que contra quienes lucha es contra sus propios derechistas.

**P**OR todas estas razones, el referéndum está perdiendo ya importancia a ojos vista. Parece claro que la oposición democrática no ignora que en el breve plazo que queda hasta el día de la votación sus negociaciones, si le son admitidas, no pueden dar ninguno de los resultados previstos: ni por la voluntad del Gobierno ni por el tiempo que quede para todo ello. El referéndum sería un simple trámite, por otra parte innecesario —a no ser por su única utilidad prevista, para la que ha sido convocado: para fortalecer la posición del Gobierno contra la oposición de derechas— y la negociación y las actividades de la oposición se centrarían en las elecciones generales para las primeras Cortes. El Gobierno podría ceder en algunos puntos para conseguir que la oposición democrática concurriera a esas elecciones generales. La cesión de esos puntos no significaría tampoco la pérdida de sus resortes de presión para conseguir unas Cortes afines a su manera de conservar el poder en el país y la administración de la riqueza. Y de la pobreza.

**E**S indudable que el Gobierno va a mantener sus puntos de vista sobre "legalizables" e "ilegalizables". En las negociaciones —o diálogos, porque pro-

bablemente evite el término de negociación, como lo ha evitado hasta ahora con términos tan equívocos como el de "prenegociaciones"— va a intentar separar los grupos que considera moderados del Partido Comunista y los situados a su izquierda. Es la condición que le exigen sus propias derechas, y de la que sabe que no puede pasar por ahora. No es, por lo tanto, solamente una táctica de división, sino algo de lo que no puede pasar. Legalizar el Partido Comunista le costaría, posiblemente, la crisis gubernamental, y una crisis nacional abierta.

**L**A autorización para que se celebre el Congreso del PSOE del 5 al 8 de diciembre —después de una negativa anterior— parece que va en ese sentido de aumentar la tolerancia hacia los partidos "legalizables". Es también una concesión hacia las presiones exteriores. Hay en Europa demasiados Gobiernos cuyos miembros pertenecen a la internacional socialista, y otros que pueden ser socialistas, como para exponerse a las acusaciones que sufriría en un campo que cuida tanto. Van a acudir a ese Congreso personalidades como el jefe del Gobierno portugués, Mario Soares, reciente anfitrión del señor Suárez; Michael Foot, líder de la Cámara de los Comunes; Willy Brandt, Mitterrand, Craxi, Pietro Nenni... ¿Puede el Gobierno dar con la puerta en las respetables narices de estos visitantes invitados por el PSOE?

El Gobierno no ha aflojado ni uno sólo de los resortes que tiene en sus manos, heredados del régimen anterior, para llevar a cabo sus planes.

**S**IN embargo, esta autorización sigue haciéndose dentro de lo que se llama "tolerancia", puesto que el Partido Socialista sigue siendo ilegal, aunque se considere "legalizable"; y las reiteradas declaraciones de sus directivos —especialmente de Felipe González y de Múgica— indican que su posición con respecto a la legalidad necesaria de todos los partidos políticos, sin exclusión, no ha variado, y que sólo la admisión colectiva les podría hacer dar el paso hacia la legalización. Siempre, además, que las condiciones impuestas a esa legalización no interfieran con su propia doctrina y con su sentido de la democracia.

**L**A "tolerancia" gubernamental parece que va a ser su forma de continuar lo que considera su proceso democrático. Es decir, no va a salir por ahora de su ambigüedad. Que esa tolerancia se extienda hacia el Partido Comunista no parece descabellado: incluso hay algunos indicios de que ya está siendo así. La estancia de Carrillo en Madrid —filmado por la televisión francesa—, la "semana del partido", los poster fijados abundantemente por las calles, los actos públicos, las declaraciones de pertenencia al partido, han sido toleradas sin excesivas perturbaciones: en otros tiempos hubiesen producido una auténtica "razzia". Lo cual no quiere decir que no pueda producirse en cualquier momento: contra los comunistas o contra cualquier fuerza de la oposición. Es la trampa que mantiene siempre abierta el sistema de tolerancias.

**E**N resumen, no parece que el Gobierno vaya a desmontar sus piezas legales ni a abandonar sus abundantes resortes de poder para conseguir sus referéndum, sus elecciones y sus Cortes que elaboren su constitución; pero parece que va a aumentar por ahora los límites de la tolerancia, dando así una sensación mayor de democracia de lo que los textos permiten. ■